

Introducción: Ciudadanía y democracia ante la crisis global

Manuela Mesa. Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ)



La democracia es en la actualidad objeto de un intenso debate, al que quiere contribuir esta edición 2013-2014 del Anuario CEIPAZ, aportando distintos enfoques y perspectivas geográficas y temáticas. Se trata de un debate relevante porque, como se señala en alguna de las contribuciones a este Anuario, la crisis financiera internacional no solo cuestiona el actual modelo de crecimiento económico y se presenta como “crisis sistémica” en cuanto a la gobernanza global. Es también una crisis política, que parece poner en cuestión los sistemas democráticos, sus lógicas de representación y rendición de cuentas, sus mecanismos de legitimación, e incluso el marco territorial del Estado-nación sobre el que se constituye el propio *demos* como comunidad política, y define el alcance de la acción de gobierno. La crisis económica, sobre todo, revela la incapacidad de los gobiernos y los mecanismos tradicionales de cooperación internacional para dar respuesta a los acuciantes problemas que afectan a la humanidad, tanto en el plano global como

La profunda crisis que afecta al continente se manifiesta en la desafección, el desánimo, la desconfianza creciente en los ciudadanos/as hacia el proyecto europeo

en el nacional, cada vez más entrelazados, planteando todo ello crecientes problemas de representatividad, legitimidad y eficacia para las democracias representativas. Como explica en este Anuario el profesor de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Antoni Jesús Aguiló, “La situación global en la que nos encontramos exige una reflexión urgente sobre los efectos de la crisis económica en la política, los desafíos a los que se enfrentan las democracias representativas y las democracias que entre todos tenemos que construir”.

La democracia debe entenderse como un sistema político capaz de garantizar a partir de las instituciones públicas un *corpus* de derechos de ciudadanía, tanto de orden político, como de naturaleza civil, económica y social. Ha de contar con un régimen electoral adecuado como un elemento fundamental, aunque no se limita a ello, pues también remite, como objetivo central, a la materialización de las aspiraciones colectivas de mejora del bienestar de la ciudadanía, definidas por esta como derechos que en algunos casos son de carácter programático, y en otros casos como derechos exigibles cuya materialización requiere de políticas públicas eficaces y de los recursos fiscales necesarios; la democracia, por ello, no se limita a un ejercicio periódico de renovación de dirigentes; es un sistema de garantías ciudadanas, y de ejercicio de la ciudadanía integral, definida a partir de los derechos y obligaciones que todos los individuos poseen en función de su pertenencia a un Estado nacional. El carácter crecientemente globalizado y transnacional de la economía, las relaciones sociales, los problemas ambientales y otros riesgos globales, y la naturaleza estatal y territorial de la democracia plantea, sin embargo, una contradicción cada vez más difícil de solventar, que conduce a un debilitamiento de la soberanía de los Estados y de su fundamento, que es la voluntad popular, lo que a su vez comporta un visible vaciamiento del contenido y alcance de la democracia y de sus mecanismos de representación, de su legitimidad, y de su contenido substantivo en cuanto a derechos de ciudadanía. De nuevo, como plantea Aguiló, la globalización neoliberal ha favorecido la “desdemocratización del Estado, la política y la sociedad”. Y esto se expresa en “Una democracia donde la distancia entre representantes y representados aumenta, que identifica la expresión del pueblo con el voto emitido cada ciertos años y un con papel muy limitado a la sociedad civil, sin mecanismos de control ciudadano”.

Es en este contexto más amplio en el que se ha de situar la creciente desafección de la ciudadanía hacia la democracia y algunas de sus instituciones y actores clave, como los partidos políticos. Se acumulan las pruebas de que la percepción ciudadana sobre los partidos políticos se ha ido deteriorando, y los ciudadanos/as tiene menos confianza en ellos que en cualquiera de las otras instituciones básicas de un sistema democrático. En los 27 estados miembros de la

Unión Europea sólo el 18% de los encuestados expresan confianza hacia los partidos políticos. Ya antes del inicio de la crisis, el nivel de confianza más alto, que correspondía a Dinamarca, era sólo del 40%, mientras que el más bajo, que correspondía a Hungría, solo llegaba al 8% (Eurobarómetro nº 68, mayo 2008). En ese mismo año, a título comparativo, en América Latina sólo un 18% afirmaba tener confianza en los partidos políticos (Latinobarómetro, 2008). Son datos preocupantes, porque los partidos son un elemento central de la democracia y aunque la democracia no se limita al juego electoral protagonizado por los partidos, es difícil imaginar una democracia sin partidos políticos fuertes y dinámicos.

Siguiendo a Aguiló, a menudo la democracia liberal actual se caracteriza por su carácter procedimentalista, minimalista y elitista, que la reduce a un método para la elección de representantes políticos, y la vacía de contenido. Otro de sus rasgos problemáticos es que se trata de un sistema que no comparte el poder público con la ciudadanía, sino con los actores privados y la élites en el poder, cuyos intereses son protegidos. La partitocracia —cuyo indicador más visible sería el peso creciente de los políticos profesionales— y la colusión de intereses con los *lobbies* corporativos —que a menudo se expresa en el fenómeno de las “puertas giratorias”, por el que se alternan las responsabilidades públicas y el paso por empresas privadas—, cuando no la corrupción pura y simple, son fenómenos que explican la brecha creciente entre las élites gobernantes y la ciudadanía. Ello se traduce en una profunda desconfianza y desafección, y a la postre nutren tendencias tan visibles como la desideologización, la apatía política y el conformismo social. Finalmente, este autor realiza una serie de propuestas para “(des)aprender” la democracia actual, “descolonizarla” y “desmercantilizarla”: “no se trata de rechazar la democracia representativa liberal ni sus aportaciones, sino de señalar sus insuficiencias, proponiendo caminos para transformarla”.

Con todos estos elementos de contexto, no ha de extrañar que el debate sobre la democracia sea especialmente intenso en el marco europeo. La profunda crisis que afecta al continente se manifiesta en la desafección, el desánimo, la desconfianza creciente en los ciudadanos/as hacia el proyecto europeo. Como muestran los datos del Eurobarómetro (2012) la confianza en el proyecto europeo ha disminuido significativamente desde el inicio de la crisis en 2007 hasta el momento actual. En el caso de España, se ha pasado de un 65% a favor de la Unión Europea a un 20%, lo que significa una caída del 52%. En el caso de Italia, ha caído un 22% y en el caso de Alemania un 29%.

El déficit democrático de la Unión Europea y la falta de rendición de cuentas de sus instituciones, así como las políticas de austeridad que se han impuesto a los países del Sur, han hecho que para la gran

*La pobreza y la
desigualdad
también
erosionan la
democracia y
debilitan su
legitimidad*

mayoría de los ciudadanos/as, la Unión Europea se haya convertido en el equivalente a lo que fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los latinoamericanos en la década de los ochenta, con sus planes de ajuste estructural. Como explica el Informe de Intermón Oxfam (2012), la década de austeridad en América Latina duplicó el número de pobres urbanos y el continente ha tardado más de 25 años, en recuperar el nivel de pobreza previo a la crisis. Como cita, la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff en este Informe: “Nosotros ya hemos vivido esto. El Fondo Monetario Internacional nos impuso un proceso que llamaron ajuste, ahora lo llaman austeridad. Había que cortar todos los gastos, los corriente y los de inversión. Aseguraban que así llegaríamos a un alto grado de eficiencia, los salarios bajarían y se adecuarían los impuestos. Ese modelo llevó a la quiebra de casi toda Latinoamérica en los años ochenta”.

En Europa, “La austeridad como medida política para satisfacer a los mercados financieros, cuestionan la legitimidad del proyecto europeo. La crisis económica ha generado una crisis social, que pone en duda, la legitimidad de las instituciones políticas, porque los ciudadanos/as no comparten las políticas de austeridad, que están destruyendo el estado del bienestar. Una democracia que establece un orden social y político que considera los intereses particulares de la clase dominante como intereses generales de todos, es un sistema democrático débil, incapaz de promover una sociedad incluyente, que vela por satisfacer las necesidades de todos/as (Nair, 2012). Y por lo tanto en palabras de Schreck (2012) se trata de un proyecto europeo elitista que considera los intereses de los acreedores financieros por delante de los derechos de los ciudadanos/as y cuestiona el papel del Estado en regular los mercados.

Algunos autores (Aguiló, 2012) hablan del secuestro de la democracia por las élites neoliberales, que están confiscando las rentas de los ciudadanos para salvar a los bancos, mercantilizando la salud y la educación, reduciendo las pensiones e imponiendo unas políticas de ajuste que incrementan el desempleo, la pobreza y la desigualdad (Aguiló, 2013). Estas políticas están generando un gran sufrimiento y empobrecimiento general de la población del Sur de Europa.

El resultado es avance del populismo, el desencanto y el hartazgo de los partidos políticos y de las instituciones en general por parte de los ciudadanos/as. Esta desafección y desconfianza sobre el proyecto europeo deberían ser una señal de alerta para Europa.

La percepción de que es un proyecto encallado en los intereses de las élites, junto con una tecnocracia europea incomprensible y sin capacidad de proponer un futuro que incluya el bienestar y los derechos de la mayoría de los ciudadanos, es cada vez más generalizada. El sueño europeo está hoy más lejos que nunca. La democracia

tiene que ser re-pensada, para fortalecerse e incorporar las demandas de ese 99% de la población.

Puede que no sea necesaria, posible o deseable una completa reinención de la democracia, y el debate deba centrarse en la recuperación de los fundamentos del sistema democrático y los pactos sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que vinculaban la idea y práctica de la democracia a los conceptos de justicia y paz, y revisarlos en el contexto de globalización que domina la sociedad internacional contemporánea. Como explica Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, "los pueblos, la paz y las generaciones venideras son los tres pilares sobre los que se pretendía edificar un nuevo modelo de convivencia global, como se reflejó en la Carta de las Naciones Unidas. Desde entonces, el sistema de Naciones Unidas sigue proporcionando unas directrices para la acción en el ámbito de la Cultura de Paz, los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente. Sin embargo, hoy existe "un nuevo diseño mundial" en el que el predominio del poder de los mercados, la economía de la especulación y la deslocalización productiva están erosionando los cimientos del bienestar social en aquellos lugares, como en la Unión Europea, donde se habían logrado implantar". Federico Mayor plantea que es tiempo de avanzar hacia una "democracia genuina" en el que los principios democráticos se conviertan realmente en la norma de conducta del quehacer cotidiano y del funcionamiento de las instituciones locales y nacionales. Para lograr esto, son necesarias "transiciones múltiples" que permitan pasar de la economía de la especulación y la guerra a una economía de desarrollo global basada en valores éticos.

La pobreza y la desigualdad también erosionan la democracia y debilitan su legitimidad: en cuanto a la legitimidad de origen, al situar a los ciudadanos en una posición de subordinación que les impide actuar y decidir de manera autónoma de cara a la elección y las opciones democráticas. En cuanto a la legitimidad de resultado, pues son la expresión más dolorosa y visible de la incapacidad de los sistemas democráticos de responder a sus aspiraciones de igualdad y de materialización de derechos básicos de orden civil, económico, y social. Cuando el Estado no es capaz de garantizar unos derechos básicos para la ciudadanía a partir de sus instituciones, están pierden legitimidad y se vacían de contenido. En este marco, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Complutense José Antonio Sanahuja describe las nuevas geografías del pobreza y la desigualdad en el plano global. En los últimos años se han producido cambios importantes en el sistema internacional, con el ascenso de los países emergentes, en especial en Asia. China e India, en particular, han duplicado su renta per cápita en menos de veinte años. Dado que en esos dos países vive un tercio de la población mundial, su ascenso afecta de manera determinante a esas geografías. China

y en menor medida India han tenido un papel decisivo en la disminución global de la reducción de la pobreza extrema, en el marco de los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), pero en una aparente paradoja, el fuerte aumento de la desigualdad interna en los países emergentes, y en particular en China, explican el también visible aumento de la desigualdad global, que es cada vez más acusada.

En ese contexto global en el que hay menos pobreza extrema, pero más desigualdad global, hay importantes variaciones por regiones y es en el caso del África Subsahariana en el que la situación es más preocupante, porque en los treinta años contemplados por los ODM sólo se ha logrado reducir la tasa de pobreza extrema en esta región en tres puntos. Y además, la reducción de la pobreza no implica su superación; buena parte de las personas que han dejado atrás la pobreza extrema siguen siendo pobres. En 2015 aun habrá en torno a 1.000 millones de personas sumidas en la indigencia y, unos 800 millones que padecerán hambre. Se trata de un imperativo ético y político ineludible que debe seguir presente por mucho que en 2015 expiren los ODM.

Como señala Sanahuja en su contribución al Anuario, 2015 cerrará un ciclo de política de desarrollo en el que los éxitos alcanzados en la reducción de la pobreza extrema no deben dar paso a la complacencia y a ignorar el fuerte aumento de la desigualdad que se ha registrado en las últimas décadas. Si durante la mayor parte del siglo XX la desigualdad global se explicaba por las diferencias de renta entre países, en la actualidad empiezan a ser más relevantes las crecientes disparidades sociales dentro de los países. Los datos que se aportan en ese capítulo revelan un proceso global de convergencia que acerca al alza las rentas de los más ricos, sea en los países emergentes o de la OCDE; que aproxima también las rentas de los más pobres, al alza en las economías emergentes y a la baja en las economías avanzadas; y lo que es más significativo, una “gran divergencia” que aumenta la desigualdad entre unos y otros, a escala global y al interior de la mayor parte de todos los países, tanto avanzados como emergentes. Ello supone un cambio profundo en la tendencia histórica, con evidentes riesgos para la democracia, tanto para su dimensión social y de derechos, como en términos de gobernabilidad democrática y estabilidad política. No se trata de procesos inevitables, y como resultado de opciones políticas, es a través de la política como se pueden revertir. Ello comporta, según este autor, “exigencias en materia de regulación de las finanzas globales y de estabilidad macroeconómica y financiera internacional; del comercio, la financiación del desarrollo, de acceso a la tecnología, de medio ambiente y sostenibilidad y de seguridad humana, a través del un multilateralismo eficaz”.

América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad del mundo y esto plantea extraordinarios retos para la democracia en la región. En las últimas décadas, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el 10% más rico de la población ha recibido, en el promedio regional, el 37% del ingreso. Esta proporción es casi tres veces la que ha recibido el 40% más pobre (poco más del 13% de ingreso). Esta desigualdad económica se refleja en muchas otras formas de desigualdad, como la concentración del poder. Según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (OEA y PNUD, 2009: 14), “la función de la democracia es redistribuir el poder para garantizar a todos los individuos el ejercicio de sus derechos”. La desigualdad del ingreso es causa y consecuencia de la asimetría del poder político, la debilidad del Estado y de secuelas como la crisis de gobernabilidad y la baja calidad de la democracia (OEA y PNUD, 2009: 62). El frecuente incumplimiento de las promesas electorales y la debilidad de lo público hace que determinados temas queden marginados de la agenda (OEA y PNUD, 2009: 62). “La desigualdad extrema de poder implica pérdida de capacidad estatal para expandir la ciudadanía. Dado que restringe el proceso democrático de la ciudadanía (control de agenda), sino que limita también la tramitación de las demandas sociales. Esto hace que las sociedades muy desiguales tiendan a proporcionar una protección social muy limitada, dado que los sectores con más recursos acceden a sistemas privados y la voz y las demandas de los sectores excluidos y sus necesidades no se tienen en cuenta y por lo tanto no se incluyen en la agenda pública” (Nuestra democracia, 2011: 171).

Como plantea el informe de la OEA y el PNUD (2009), la combinación de poco Estado y de los desafíos de la democratización y de la reducción de la pobreza y la desigualdad constituye el principal reto que enfrenta la democracia en América Latina (OEA y PNUD, 2009: 65). Otro de los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina es el que se refiere a la inseguridad en la región, que se explica por la penetración del crimen organizado, en particular el narcotráfico. El número de homicidios en la región, en términos absolutos y relativos, es de los más altos del mundo. La inseguridad ciudadana ha favorecido la participación de los ejércitos en tareas de seguridad ciudadana y han permitido que afloren expresiones autoritarias o la utilización de prácticas que violan los derechos humanos, que entre otras incluyen las ejecuciones extrajudiciales. Las consecuencias de la pérdida de capacidad del Estado para hacer valer la legalidad son múltiples, como la emergencia de las empresas de seguridad privada, o la aparición de linchamientos y otras expresiones primarias de demanda de justicia al margen del Estado de derecho. Como se afirma en el informe de la OEA sobre Seguridad Pública en las Américas

La inseguridad ciudadana no sólo es una de las amenazas centrales de la convivencia civilizada y pacífica, sino también un desafío para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho

(2008: 11): “La inseguridad ciudadana no sólo es una de las amenazas centrales de la convivencia civilizada y pacífica, sino también un desafío para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Los altos niveles de inseguridad ciudadana en América Latina son un riesgo para la estabilidad de la democracia en la región. Una democracia que no es capaz de asegurar la vigencia de unos derechos elementales, como el derecho a la vida, o la integridad física, o que no es capaz de asegurar el ejercicio pleno de derechos sociales y económicos, termina creando las condiciones que favorecen la violencia y el autoritarismo: Según el informe Nuestra Democracia (2011: 185), “la inseguridad ciudadana y el temor deterioran el apoyo a las instituciones democráticas y permiten que afloren expresiones autoritarias largamente arraigadas en la cultura política de la región”. Es más, la criminalidad es el asunto que con mayor facilidad conduciría a la población latinoamericana a justificar un golpe de Estado. En segundo lugar, en los contextos con alta tasa de homicidios, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas tienden a asumir roles protagónicos, que las pueden llevar a ganar espacios de autonomía indebidos frente a los poderes civiles y democráticos. En tercer lugar, las consecuencias de la pérdida de capacidad del Estado para hacer valer la legalidad, les debilita como institución. (Nuestra democracia, 2011:186). Estos retos, sin embargo, no ponen en cuestión el proceso de consolidación democrática que vive la región y el fin de la amenaza de los golpes militares. Aunque en los últimos veinte años, hubo 18 presidentes que no completaron sus mandatos, esto se debió más a un cuestionamiento de su desempeño, que a su legitimidad democrática (PNUD y OEA, 2009:18).

América Latina es una región democrática como lo reafirman sus procesos electorales y las tendencias que de ellos emanan. Como explica Francisco Rojas Aravena para este Anuario, el nuevo ciclo electoral que vive América Latina refleja la superación del autoritarismo y de los regímenes militares. Desde hace tres décadas, el debate es como lograr una democracia más amplia, eficaz y participativa.

El momento parece oportuno para abordar ese debate, pues la región encara un ciclo de cambio electoral presidencial, que se ha iniciado con tres elecciones en 2012 (República Dominicana, México y Venezuela), seguidas con cinco elecciones prevista en 2013 (Cuba, Ecuador, Paraguay, Chile, Honduras y de nuevo Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez) y otras siete que se producirán en 2014. Ante ese ciclo electoral, como explica el autor, se constata un debilitamiento de la cultura política y un bajo reconocimiento de la cultura democrática. “Los avances en las democracias latinoamericanas no se consolidarán sino se refuerza la cultura política y las formas y prácticas de la democracia misma. Es importante apostar por una democracia de los ciudadanos/as y trascender a las democracias de los electores. Para ello es necesario articular nuevas formas de parti-

cipación política para contrarrestar la crisis de representación; en segundo lugar, fortalecer la independencia de los poderes, su control y rendición de cuentas y en tercer lugar modernizar sus organizaciones, proveyéndolas de recursos humanos eficaces. Son necesarios la ejecución de políticas públicas en el campo de la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública para la sostenibilidad de la democracia en la región” (PNUD y OEA, 2010: 15).

Para los países de la en su momento denominada “Primavera Árabe”, que han logrado poner fin a los regímenes autoritarios que llevaban décadas instalados en el poder, se ha iniciado un proceso de consolidación democrática que se torna complejo y difícil y que presenta numerosos retos. En aquellos países como en el caso de Túnez, Marruecos y Egipto, la celebración de elecciones han permitido el ascenso de los movimientos islamistas al poder. Estos movimientos de carácter conservador son heterogéneos y van desde las posiciones salafistas hasta las post-islamistas y las islamistas tradicionales. Como planteaba Ignacio Álvarez Ossorio (2012), “este periodo de transición es bastante incierto, porque los árabes deberán encontrar su propio modelo, para profundizar en la senda democrática y lograr un sólido crecimiento económico sin renunciar a sus valores tradicionales (Álvarez Ossorio 2012: 121).

En Jordania, el creciente descontento sociopolítico ante el inmovilismo gubernamental ante las demandas realizadas bajo el ímpetu de la Primavera Árabe ha radicalizado a algunos sectores (Abu-Tarbush, 2013) que ya no sólo exigen la reforma del régimen, sino un cambio más radical.

En este proceso, Siria ha quedado enquistada en una guerra civil que no logra derrocar al régimen de Bashar El Asad y se encuentra atrapada en una espiral de violencia de la que cada vez resulta más difícil vislumbrar una salida aceptable. Como explica en su contribución a este Anuario la periodista y especialista en Mundo Árabe, Rosa Meneses, “Lo que empezó en marzo de 2011 como una revuelta pacífica contra la dictadura, al calor de la Primavera Árabe, ha evolucionado en uno de los conflictos más sangrientos que ha vivido la región en los últimos años”. Y la internacionalización del conflicto es una serio peligro para la estabilidad de la región.

En otros países el escenario es también incierto. En el caso de Irak, diez años después de la invasión de 2003, su frágil democracia no ha logrado superar las tensiones sectarias entre chiíes y sunitas. Retorna a ese país el riesgo de una confrontación armada a partir de fracturas confesionales, como la que ya desangró al país entre 2006 y 2007, cuanto los atentados y asesinatos selectivos perpetrados por milicias de ambas ramas del islam causaron miles de muertos. Si el actual Gobierno de Al Maliki no logra garantizar una adecuada parti-

La democracia queda desvirtuada en un régimen de ocupación que amenaza con seguir ampliando y consolidando los asentamientos israelíes y que vacía de contenido, las capacidades de los gobiernos palestinos para actuar sobre su territorio

cipación de los suníes en el poder, la escalada de tensión seguirá subiendo y la situación puede devenir en guerra. Irak se ha convertido en el octavo país más corrupto del mundo, según el índice que elabora anualmente Transparencia Internacional. Es el noveno país en el ranking de “Estados fallidos” que elabora la revista *Foreign Policy*. Las violaciones de derechos humanos y el uso de la tortura siguen siendo una práctica habitual. Además, 1,9 millones de iraquíes pasan hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, pese a que Irak es uno de los países con mayor riqueza petrolera del mundo, si bien la producción petrolífera no ha legado a superar la de la época de Saddam. La celebración de elecciones no ha sido suficiente para consolidar un proceso democrático y crear unas instituciones gubernamentales que pongan fin a la corrupción, el clientelismo y a la violencia que asola al país. La inestabilidad no acabará mientras que no se supere la fragmentación del país en grupos étnicos y religiosos enfrentados entre sí, mientras persistan los atentados terroristas y se mantenga la creciente influencia de actores externos sobre la política de Irak.

Una situación muy similar es la que afronta Afganistán, un país donde todavía la guerra sigue en curso, y en el que el proceso de consolidación democrática, más allá de la celebración de elecciones está muy lejos de convertirse en una realidad.

También resulta difícil hablar de democracia en Palestina, a pesar de la celebración de elecciones y de la existencia de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, y del gobierno de Hamás en la franja de Gaza. La democracia queda desvirtuada en un régimen de ocupación que amenaza con seguir ampliando y consolidando los asentamientos israelíes y que vacía de contenido, las capacidades de los gobiernos palestinos para actuar sobre su territorio. El profesor de la Universidad de la Laguna, Jose Abu Tarbush analiza en este Anuario como el modelo negociador inspirado en los Acuerdos de Oslo de 1993 está agotado. La política de hechos consumados aplicadas por el gobierno de Israel hace cada vez más difícil la opción de los dos Estados. Asimismo, como se explica en este capítulo, Israel se ha presentado tradicionalmente como “un oasis democrático en medio de un desierto autoritario” y el que se planteaba que sólo un cambio democrático en el mundo árabe podría contribuir a la paz entre los Estados Árabes e Israel. Sin embargo, la Primavera Árabe ha desarmado estos argumentos por la vía de los hechos; esto implica que una mayor apertura de los sistemas políticos árabes y la incorporación de las demandas de la ciudadanía árabe, implican un mayor aislamiento y hostilidad hacia Israel, por sus políticas de ocupación.

En la región Asia-Pacífico, el anuario de este año aborda el conflicto China-Japón en torno a la disputa territorial por las islas Diaoyu/Senkaku. Como explica el director del Observatorio de la Política China, Xulio Ríos, se trata de un conflicto que ha estado marcado por una ambivalencia ascendente entre, por un lado, las heridas de las guerras de finales del XIX y XX y por otro, por la intensificación de los intercambios económicos y comerciales. Este conflicto es un reflejo de los cambios en los equilibrios de poder que se están produciendo en la región con el ascenso de China como potencia económica y militar. Asia-Pacífico se ha convertido en la zona con mayor vitalidad económica del mundo, pero al mismo tiempo aumentan los riesgos de conflicto interestatal por razones territoriales. En este contexto, Japón coincide con Estados Unidos en el objetivo de contener a China. Al mismo tiempo, como explica Xulio Ríos, los vínculos que China y Estados Unidos establezcan en la región seguirán siendo esenciales para la estabilidad de la zona, según se prime el equilibrio basado en el compromiso con el desarrollo en la región o el antagonismo militar. Esto es particularmente relevante en un momento en el que Estados Unidos está definiendo una nueva estrategia en la región, que pasa por la remilitarización, con el objetivo de tener una presencia reforzada. Esto se manifiesta, como explica el general en la reserva, Alberto Piris, en el mantenimiento por parte de la administración Obama de unas relaciones militares que le permitan utilizar las instalaciones locales y/o realizar maniobras conjuntas en Tailandia, Filipinas y Singapur, entre otros. Como menciona en su capítulo, “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no olvidan que construyeron en Tailandia una de las más largas pistas de aterrizaje existentes en el Sureste asiático en la base de U-Tapao, desde donde operaron los temibles B-52, responsables del “bombardeo en alfombra” que arrasó Vietnam.(..) También vuelven a primer plano, la base naval de Subic y la base aérea de Clark, ambas en Filipinas, pivotes esenciales para el esfuerzo bélico estadounidense en los años sesenta y setenta del pasado siglo”.

En el mundo actual necesitamos construir un modelo de gobernanza global-local que permita abordar los problemas que enfrenta la humanidad desde la negociación y el diálogo. Para ello, los sistemas democráticos deben ser repensados, para transformarse en una democracia de los ciudadanos/as del mundo.

Referencias bibliográficas

Aguiló, Antoni Jesús (2012), “La austeridad se impone a la democracia”, *Other news en español*, 3 de Diciembre.

Alvarez-Ossorio, Ignacio (2012), “Primavera democrática árabe: ¿otoño islamista?” en *Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales, Anuario CEIPAZ 2012-2012*. Madrid: Fundación Cultura de Paz.

Intermón Oxfam (2012), *Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España*. Disponible en : www.intermonoxfam.org.

Nair, Sami (2013), "Frente al desastre", en *El País*, 8 de marzo

OEA (2008), *La seguridad pública en las Américas. Retos y oportunidades*, Washington DC: OEA.

Piris, Alberto (2012), "Estados Unidos ante los desafíos de Irak y Afganistán: ¿El fin de un ciclo?", en *Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales, Anuario CEI-PAZ 2012-2012*. Madrid: Fundación Cultura de Paz.

PNUD (2004), *La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*.

PNUD y OEA (2010), *Nuestra democracia*, México: Fondo de Cultura.

Streck, Wolfgang (2012), "La integración europea: un proyecto elitista" en *Nueva Sociedad* nº 242.

VV.AA. (2009), *La democracia de la ciudadanía: una agenda para la construcción de la ciudadanía en América Latina*. OEA/PNUD.

VV.AA. (2010), *Nuestra democracia*, México: PNUD, OEA y FCE.